

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la política de agua y desaladoras del Gobierno de España.**

Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actual coyuntura, se hace imprescindible alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua, y la actualización del Plan Hidrológico Nacional, adaptado al reto del cambio climático y escenarios 2030-2040, abordando la gobernanza, la interrelación de cuencas, la integración de la desaladoras, las demarcaciones hidrográficas y administraciones territoriales y mejorar la resolución de conflictos.

Prueba del mal gobierno en materia de Agua es que los incumplimientos y retrasos reiterados en aplicar la legislación europea suponen multas millonarias por parte de la UE.

El planteamiento de construcción de las desaladoras fue precipitado y sin ningún estudio de viabilidad técnica. El único objetivo político era ofrecer una alternativa al trasvase del Ebro con la construcción de 15 desaladoras, recuperando el proyecto inicial incluido en el Anexo del Plan Hidrológico Nacional de 2001.

Entre 2004 y 2011, el Ministerio de Medio Ambiente fue elevando al alza la inversión inicial contemplada, que pasó de 721 millones de euros a 1337 millones, un 85,4 % de sobrecoste en la fase de redacción de los proyectos. Para completar las obras de estas desaladoras, el gobierno popular ha invertido, a través de la sociedad Acuamed, 1650 millones. Se han completado 12 de las 15 desaladoras iniciales. El sobrecoste total sobre la inversión inicial prevista en 2005 de 721 ha sido de 1644 millones de euros según el Tribunal de Cuentas.

Un informe más reciente de la Asociación de Geógrafos Españoles apunta a que los recursos comprometidos de forma inadecuada o por sobrecostes en la red de desaladoras, desalinizadoras suman unos 2.539 millones de euros.

El caso de las desaladoras de Moncofa y Oropesa, ambas en la provincia de Castellón. Las dos desaladoras, ya finalizadas, han tenido un coste total de 104 millones de euros (49,1 y

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Congreso de los Diputados
Carrera de San Jerónimo, s/n
28071 · Madrid · España

55,4 millones de euros, respectivamente). En 2017 ambas instalaciones están paradas por ausencia de demanda en las poblaciones teóricamente beneficiadas y por falta de culminación de las infraestructuras de conducción del agua desalada desde las plantas hasta los depósitos de distribución de las poblaciones.

Ahora, la UE reclama 50 millones de euros utilizados para construir desaladoras de Oropessa o Moncofa en Castellón si no se ponen en marcha antes de marzo de 2019.

Nuestro país está en una situación en la cual si se pone las desaladoras de Oropessa y Moncofa en marcha se arruinará a esos municipios de por vida y si no se activan en 2019 se debe pagar una multa a la Unión Europea de 50 millones y se habrá desperdiciado una infraestructura clave.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Piensa el Gobierno poner las desaladoras de Moncofa y Oropesa en marcha antes de marzo de 2019 en contra de la voluntad manifestada por los consistorios de estos municipios, o por el contrario devolverá el gobierno los 50 millones de euros que le reclama la UE si no las pone en marcha?
2. ¿Piensa el Gobierno elaborar un estudio de la viabilidad económica de las desaladoras de Moncofa y Oropesa?
3. ¿Piensa el Gobierno abordar la conexión de las desaladoras con los sistemas hídricos gestionados por las Confederaciones hidrográficas?
4. ¿Piensa el Gobierno desarrollar el suministro de electricidad a las plantas desaladoras a partir de fuentes renovables?
5. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impulsar la reutilización y una gestión integral del ciclo del agua urbana así como las sinergias con la producción de energía?
6. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para revertir el deterioro de una amplia mayoría de acuíferos en nuestro país por la sobreexplotación?
7. ¿Piensa el Gobierno convocar una Mesa Nacional del Agua para renovar el Plan Hidrológico Nacional?



Melisa Rodríguez Hernández
Diputada por Santa Cruz de Tenerife
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos